



Asamblea General

Distr. general
28 de julio de 2021
Español
Original: inglés

Septuagésimo sexto período de sesiones

Tema 28 del programa provisional*

Adelanto de las mujeres

Mejoramiento de la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales

Informe del Secretario General

Resumen

De conformidad con la resolución [74/126](#) de la Asamblea General, en el presente informe se examinan las actividades emprendidas por los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas para que las mujeres y las niñas de las zonas rurales, especialmente las más pobres y marginadas, puedan mejorar sus medios de subsistencia, su bienestar y su resiliencia. Los logros en esta esfera son esenciales para avanzar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y garantizar que no se deje atrás a ninguna mujer ni ninguna niña de las zonas rurales en su aplicación, su seguimiento y sus resultados (véase la resolución [70/1](#) de la Asamblea). Se formulan recomendaciones para su examen por la Asamblea.

* [A/76/150](#).



I. Introducción

1. En su resolución 74/126 sobre el mejoramiento de la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales, la Asamblea General solicitó al Secretario General que la informase en su septuagésimo sexto período de sesiones sobre la aplicación de la resolución. En el presente informe se evalúa la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales desde el septuagésimo cuarto período de sesiones, teniendo en cuenta los importantes efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que han exacerbado las desigualdades imperantes entre los géneros. En el informe se destacan los esfuerzos de los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otros agentes para abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas de las zonas rurales, especialmente las más pobres y marginadas, y para permitirles mejorar sus medios de vida, su bienestar y su resiliencia en el contexto de las múltiples crisis que amenazan con erosionar aún más los logros alcanzados en decenios anteriores.

2. En el presente informe se evalúan los esfuerzos nacionales encaminados a mejorar la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales mediante: a) la inversión en seguridad alimentaria y nutrición, con especial referencia a las dificultades derivadas de la crisis de la COVID-19; b) el apoyo a la contribución fundamental de las mujeres rurales e indígenas a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; c) el fomento de la resiliencia, en particular de las pequeñas agricultoras, ante el cambio climático y la degradación ambiental; d) la mejora de la protección social, en vista de su mayor necesidad durante la pandemia; e) la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente teniendo en cuenta la pandemia en la sombra de violencia, y el suministro de servicios esenciales; y f) el refuerzo de la reunión, el análisis y la difusión de datos desglosados por sexo y edad y estadísticas de género. El informe concluye con recomendaciones que se someten al examen de la Asamblea¹.

3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un marco amplio y transformador que centra la atención en el imperativo de fomentar el desarrollo rural y el empoderamiento de las mujeres y las niñas de las zonas rurales. En ella, se pide a los Estados Miembros que dediquen recursos a desarrollar las zonas rurales mediante la agricultura y la pesca sostenibles, y a apoyar a las agricultoras, las ganaderas y las pescadoras de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados (resolución 70/1 de la Asamblea General). Entre otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, resultan especialmente importantes el Objetivo 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), el Objetivo 2 (poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición), el Objetivo 5 (lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas), el Objetivo 13 (adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) y el Objetivo 15 (proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres).

¹ Se recibieron propuestas de 22 Estados Miembros (Argentina, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, China, Colombia, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Ghana, Irán (República Islámica del), Kirguistán, Líbano, Mongolia, Perú, Qatar, República Árabe Siria, Rumania, Tailandia, Turkmenistán y Zimbabwe) y de seis organismos de las Naciones Unidas (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unión Internacional de Telecomunicaciones).

4. En el examen y la evaluación de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing² con motivo de su 25º aniversario se puso de relieve la importancia de abordar los niveles desproporcionados de pobreza, analfabetismo, carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y vulnerabilidad a la degradación ambiental y el cambio climático entre las mujeres rurales, así como la correspondiente necesidad de mejorar sus medios de vida, sus oportunidades de empleo y sus resultados, y de aumentar su acceso a la protección social, los servicios públicos, la infraestructura sostenible y los recursos productivos (véase [E/CN.6/2020/3](#)).

5. El tema prioritario del 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en 2018, se centró en los desafíos y las oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales (véase [E/CN.6/2018/3](#)). En las conclusiones convenidas se establecieron medidas concretas para su aplicación por parte de los Estados Miembros con el fin de superar las persistentes desigualdades de género, la discriminación y las barreras estructurales y de apoyar los derechos, el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas rurales (véase [E/2018/27](#)).

6. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer contiene un llamamiento a los Estados partes a fin de que adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales, concretamente en el artículo 14³. En su recomendación general núm. 34 (2016), sobre los derechos de las mujeres rurales ([CEDAW/C/GC/34](#)), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce que las mujeres de las zonas rurales, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, se ven profundamente afectadas por la pobreza, la exclusión económica y política, el cambio climático y los desastres naturales, así como por la falta de acceso a la infraestructura, los servicios y la protección social. En la recomendación se señala que las políticas de desarrollo rural siguen pasando por alto las prioridades y los derechos de las mujeres, en especial los de las agricultoras y las trabajadoras migrantes empleadas en el sector agrícola.

7. En la recomendación general núm. 37 (2018) del Comité, sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático ([CEDAW/C/GC/37](#)), se señala que las mujeres rurales e indígenas se ven directamente afectadas por los desastres y el cambio climático, al ser productoras de alimentos y trabajadoras agrícolas. Su resiliencia ante el clima se ve comprometida por la inseguridad de la tenencia de la tierra, la mala calidad de las parcelas y la emigración de los hombres, lo que las deja solas a la hora de asumir las responsabilidades agrícolas. La escasez de recursos relacionada con el clima también aumenta su exposición al riesgo de violencia.

8. A nivel mundial, más de 3.000 millones de personas y el 80 % de la población en situación de pobreza extrema viven en zonas rurales, y alrededor de 2.500 millones dependen de los medios de subsistencia agrícolas⁴. Como consecuencia de las repercusiones económicas, sanitarias y sociales de la COVID-19, la pobreza mundial aumentó en 2020 por primera vez desde 1998, ya que 96 millones de personas cayeron en la pobreza extrema tras la pandemia, entre ellas 47 millones de mujeres y niñas. La proporción de 118 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres que se calculaba

² *Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer*, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, y anexos I y II.

³ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1249, núm. 20378.

⁴ Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, *Global Food Policy Report* (Washington D.C., 2019).

para 2021 podría aumentar a 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030⁵. La inseguridad alimentaria mundial estaba en aumento antes de la pandemia, pero los efectos de la COVID-19 han provocado un aumento grave y generalizado que se espera que continúe durante 2021 y hasta 2022 y que afecte a los hogares vulnerables de casi todos los países, con un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas⁶. Casi una tercera parte de las mujeres empleadas trabajan en la agricultura en todo el mundo, lo que incluye la silvicultura y la pesca, de manera que se concentran en actividades informales y mal remuneradas, que requieren gran cantidad de tiempo y trabajo y que ofrecen escasa protección social o seguridad de los ingresos⁷. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes carencias de los sistemas de protección social en todo el mundo, especialmente para las mujeres⁸. La crisis ha amplificado las desigualdades de género existentes y ha exacerbado los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, así como la prolongada falta de atención de las políticas y de inversión, en las comunidades y los medios de vida de las mujeres rurales⁹.

9. Incluso antes de que se produjera la crisis de la COVID-19, las mujeres y las niñas de las zonas rurales estaban expuestas a un mayor riesgo de pobreza, inseguridad alimentaria, violencia y exclusión¹⁰ debido a las formas múltiples e interseccionales de discriminación a las que se enfrentan en función de la edad, los ingresos, la ubicación, el estado civil y la condición de cabeza de familia, la raza o etnia, la cultura, la condición de indígena, la orientación sexual y la identidad de género, o como mujeres afectadas por el VIH/sida, mujeres con discapacidad o mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas internas¹¹. Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias siguen limitando el acceso de las mujeres rurales a la tierra y a los recursos productivos, a los mercados y a las tecnologías, socavando su poder decisorio y el ejercicio de la expresión y la capacidad de obrar, y agravando los efectos de la COVID-19. Los crecientes índices de violencia contra las mujeres y las niñas vinculada con los confinamientos y las restricciones de movilidad debidos a la COVID-19, que se han señalado como una pandemia en la sombra de violencia, han hecho que las mujeres y las niñas de las zonas rurales estén aún más expuestas a sufrir violencia, incluidas las prácticas nocivas y el matrimonio infantil¹², y que

⁵ ONU-Mujeres, “From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19” (Nueva York, 2020).

⁶ Banco Mundial, “Food Security and COVID-19”, informe, 2 de julio de 2021; FAO, FIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, PMA y Organización Mundial de la Salud, “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020: Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables” (Roma, 2020); y FAO, “Gendered impacts of COVID-19 and equitable policy responses in agriculture, food security and nutrition”, 15 de mayo de 2020.

⁷ Organización Internacional del Trabajo, “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias del empleo femenino 2017”, Ginebra, 2017.

⁸ ONU-Mujeres, “The social protection response to COVID-19 has failed women: towards universal gender-responsive social protection systems”, documento de reflexión, mayo de 2021.

⁹ Véase [A/74/224](#) para consultar un análisis de las condiciones preexistentes entre las mujeres y niñas rurales antes de la crisis de la COVID-19.

¹⁰ Prácticamente todos los indicadores mundiales de género y desarrollo para los que se dispone de datos muestran que las mujeres rurales están por detrás de los hombres rurales y de las mujeres urbanas (véase [E/CN.6/2018/3](#)).

¹¹ ONU-Mujeres, “El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: Transformar las economías para realizar los derechos” (Nueva York, 2015).

¹² Se calcula que los retrasos relacionados con la pandemia en los programas para acabar con las prácticas nocivas y el matrimonio infantil darán lugar a unos 2 millones más de casos de mutilación genital femenina y a 13 millones más de matrimonios infantiles en el próximo decenio, en comparación con los que se habrían producido de no haberse dado la pandemia. UNFPA, “Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la

tengan menos probabilidades de recibir el apoyo que necesitan debido a la falta de servicios esenciales y recursos legales y judiciales¹³. La intensificación del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado de las mujeres para hacer frente a la crisis —que incluye el cuidado de enfermos, niños o ancianos— ha sido especialmente grave en las zonas rurales debido al limitado acceso a los servicios sociales, asistenciales y sanitarios, al agua limpia y potable, al saneamiento y a la energía¹⁴. Además, la brecha digital de género en las zonas rurales ha restringido el acceso de las mujeres y niñas rurales a la educación a distancia, a los servicios esenciales, a la financiación digital y a la información que salva vidas durante la crisis¹⁵.

10. La diversidad de las mujeres y niñas rurales y sus necesidades y prioridades particulares, que han quedado de manifiesto durante la pandemia, requieren respuestas políticas y programáticas adaptadas para mejorar sus medios de vida, su bienestar y su resiliencia frente a las crisis presentes y futuras. Esas cuestiones se analizarán en las secciones siguientes.

II. Mejora de los medios de vida, el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas de las zonas rurales

A. La inversión en seguridad alimentaria y nutrición, con especial referencia a las dificultades derivadas de la crisis de la COVID-19

11. Algunos Estados Miembros han informado sobre iniciativas para reforzar la seguridad alimentaria y la nutrición de las mujeres y las niñas de las zonas rurales y de sus familias y comunidades, muchas de las cuales también contribuyen a la producción, la transformación y la distribución agrícolas sostenibles, así como a un acceso más sostenible al agua, los bosques y otros recursos fundamentales para la seguridad alimentaria. Varios Estados Miembros también tomaron medidas para responder a los problemas de seguridad alimentaria que plantea la pandemia de COVID-19 en las zonas rurales.

12. En la Argentina, el programa ProHuerta, que aglutina a granjas familiares y organizaciones de productores y productoras de todo el país, contribuyó a la seguridad y la soberanía alimentaria mediante el cultivo agroecológico y el acceso a alimentos saludables. El programa Sembrando Soberanía Alimentaria se fijó como objetivo la autosuficiencia alimentaria de las explotaciones familiares, que trabajaban de consuno con los mercados territoriales locales y regionales para la transformación y distribución de alimentos. El programa, al que se acogieron 137 agrupaciones de productores en 2020, buscaba facilitar el acceso a alimentos seguros, asequibles y saludables producidos por explotaciones familiares. El proyecto Native Forests and Communities ha mejorado el acceso al agua, elemento crítico de la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia, de los hogares rurales campesinos e indígenas a través de la captación del agua de lluvia, entre otros medios. En general,

eliminación de la violencia por razón de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil”, 27 de abril de 2020.

¹³ ONU-Mujeres, “COVID-19 y violencia contra las mujeres: abordar la pandemia en la sombra” (Nueva York, 2020).

¹⁴ ONU-Mujeres, “COVID-19 y la economía de los cuidados: acciones inmediatas y transformación estructural para una recuperación con perspectiva de género” (Nueva York, 2020).

¹⁵ GSMA, “The Mobile Gender Gap Report” (Londres, 2020).

el proyecto pretende aumentar la productividad mediante la aplicación de planes de gestión forestal sostenible en seis provincias del norte del país.

13. Bulgaria apoya la seguridad alimentaria de las mujeres y las niñas de las zonas rurales mediante estrategias de desarrollo local dirigidas por la comunidad que también incluyen consideraciones ambientales y climáticas. Se da prioridad a los proyectos presentados por mujeres rurales, la mayoría de los cuales se centran en la producción y transformación de productos agroalimentarios.

14. En China, la Agencia Nacional de Alimentos y la All-China Women's Federation organizaron conjuntamente un acto en Xiamen con motivo del Día Mundial de la Alimentación, con el que se pretendía animar a las mujeres a convertirse en defensoras, practicantes y difusoras de la campaña “Valora la comida”, ideada para reducir el desperdicio de alimentos. Para paliar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la reducción de las ventas de productos agrícolas y contribuir a la mitigación de la pobreza y a la seguridad alimentaria, se han creado plataformas de comercio electrónico dirigidas por organizaciones de mujeres en Guangdong y Zhejiang, que venden más de 2.000 productos agrícolas procedentes de 26 provincias y regiones y 86 condados subdesarrollados, lo que ha supuesto unos ingresos de 132 millones de yuanes renminbi (20 millones de dólares de los Estados Unidos de América).

15. En el primer semestre de 2021, como parte de la respuesta nacional a la COVID-19, Colombia puso en marcha el Fondo Mujer Emprende para impulsar el emprendimiento femenino en el país. En el caso de las mujeres rurales, los sectores prioritarios de financiación giran en torno a la seguridad alimentaria: aguacate, cacao, café, azúcar de caña integral sin refinar, ganado y artesanía. La primera convocatoria de propuestas recibió 5.028 solicitudes, de las cuales el 43 % eran de mujeres rurales.

16. En El Salvador, en 2020 y 2021, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer distribuyó a nivel nacional paquetes alimentarios del Programa de Emergencias Sanitarias a mujeres líderes locales, indígenas, rurales, cabezas de familia y trabajadoras de la maquila, entre otras. Al mismo tiempo, los productores de subsistencia, tanto mujeres como hombres, recibieron apoyo para reforzar la autosuficiencia alimentaria familiar.

17. Francia ha apoyado la elaboración de las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Estas directrices voluntarias abordarán, entre otras cosas, el impacto desproporcionado de las causas estructurales del hambre en la realización del derecho a la alimentación de las mujeres y las niñas. Francia contribuye al empoderamiento de las mujeres y las niñas en las zonas rurales a través de su plan de Ayuda Alimentaria Programada, cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de las poblaciones vulnerables y luchar contra la malnutrición. En 2020, casi el 88 % de los proyectos financiados recibieron una puntuación de 1 o 2 en lo tocante a la igualdad de género como objetivo significativo o principal, de acuerdo con la definición de los marcadores de género del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

18. A través de la iniciativa de asistencia alimentaria a cambio de activos, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) pretende mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo de las personas y sus comunidades. Los hogares en situación de inseguridad alimentaria reciben transferencias en efectivo o en forma de alimentos para satisfacer sus necesidades alimentarias inmediatas. Con ello se consigue dejarles tiempo para que construyan o rehabiliten activos productivos y recursos naturales, reducir los riesgos y el impacto de las crisis, aumentar la productividad de los

alimentos y reforzar la resiliencia frente a los desastres naturales, al tiempo que se involucra a las mujeres y las niñas en la selección y la gestión de los activos y el acceso a ellos. Cada año desde 2013, el programa ha ayudado a entre 10 y 15 millones de personas de más de 50 países a restaurar cientos de miles de hectáreas de tierras degradadas para su uso productivo, a plantar miles de hectáreas de bosques, a mejorar el acceso al agua mediante la construcción de pozos y estanques y a recibir formación sobre medios de vida y prácticas agrícolas. En 2021, más de 7,5 millones de personas (3,6 millones de hombres y más de 3,9 millones de mujeres) de 49 países se beneficiaron de la iniciativa.

B. El apoyo a la contribución fundamental de las mujeres rurales e indígenas a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad

19. Varios Estados Miembros han adoptado una programación con perspectiva de género que promueve tanto el empoderamiento económico de las mujeres rurales e indígenas como la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Aunque la mayoría son proyectos relacionados con los medios de subsistencia, algunos también tienen elementos importantes que buscan cerrar las brechas de género en el acceso a la tecnología y los mercados y reforzar el ejercicio de la expresión y la capacidad de obrar y la participación de las mujeres rurales en la gestión de los recursos naturales. Algunos proyectos también están vinculados con medidas de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

20. El proyecto Bosques Nativos y Comunidad de la Argentina apoya y promueve la planificación participativa del uso de la tierra en los territorios comunitarios, así como las actividades de las mujeres indígenas y campesinas relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, específicamente los productos forestales sostenibles destinados al autoconsumo y la generación de ingresos.

21. En China, la All-China Women's Federation y la Escuela Central de Radio y Televisión Rural crearon conjuntamente cursos de formación en línea para que las mujeres agricultoras pudieran reforzar su comprensión y manejo de las tecnologías de producción agrícola sostenible y promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

22. Ghana está ejecutando el proyecto de Reducción de Emisiones en el Territorio del Karité, financiado por el Fondo Verde para el Clima, el Gobierno de Ghana y el sector privado, y mediante el que se busca restaurar 500.000 ha de bosques de sabana y plantar 25.000 ha de karité y otras especies de árboles autóctonos en reservas forestales degradadas. Con ello se pretende también promover las inversiones en la cadena de valor del karité y el empoderamiento de las mujeres, y formar a las comunidades en la gestión de bosques e incendios. Un total de 16 millones de mujeres de 21 países africanos dependen del árbol del karité para su subsistencia, pues cosechan y procesan el fruto del karité para obtener granos y manteca para su propio consumo y para la venta. La manteca de karité se utiliza en la cocina, la cosmética y como sustituto de la manteca de cacao en el chocolate. La demanda mundial se ha acelerado en los dos últimos decenios, lo que ha provocado un aumento de la presión sobre los parques forestales y bosques de karité, que también se utilizan para obtener leña y carbón vegetal y se talan para construir granjas y asentamientos, lo que resulta en la pérdida de 8 millones de árboles de karité al año en África Occidental. Se prevé una gran escasez, con graves consecuencias para los medios de vida de las mujeres y la cadena de valor del karité, además de impactos negativos en la biodiversidad y el clima. Se espera que el proyecto reduzca las emisiones de carbono mediante el apoyo

a los sistemas agroforestales en paisajes biodiversos que sostendrán la producción de karité por parte de mujeres.

23. En Eslovenia, los asentamientos rurales están rodeados de zonas agrícolas y forestales con una rica fauna y flora, y las zonas protegidas cubren más de la mitad del territorio esloveno. Los propietarios rurales, muchos de los cuales son mujeres, desempeñan un papel fundamental en la conservación de la naturaleza. En el Plan de Desarrollo Rural de Eslovenia (2013-2020) se insta a apoyar la diversificación de las actividades agrícolas, entre otras cosas mediante el desarrollo de actividades subsidiarias en las explotaciones, que son una importante fuente de ingresos para las mujeres rurales, y los estímulos a la creación de empresas por parte de las jóvenes agricultoras con el fin de incentivar y apoyar a las mujeres que deciden vivir en el campo. El Plan tiene tres prioridades; con arreglo a la primera de ellas (restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura), aproximadamente un tercio de las tierras agrícolas eslovenas están vinculadas a contratos remunerados para mejorar la biodiversidad y la gestión del agua y el suelo.

24. Francia ha creado un fondo de 120 millones de euros para apoyar a las organizaciones de mujeres, en el marco del cual en 2021 se abrió una convocatoria de proyectos por valor de 5 millones de euros destinada, entre otras cosas, a apoyar la gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, la agroecología, la agrosilvicultura, la agricultura familiar y la pesca sostenible, así como el desarrollo rural y la capacitación de las mujeres.

25. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agencia Brasileña de Cooperación y siete países asociados de la región de América Latina y el Caribe están ejecutando conjuntamente el proyecto +Algodón para promover el desarrollo sostenible de la cadena de valor del algodón y ampliar los derechos y el empoderamiento económico de las mujeres y niñas rurales e indígenas en el sector del algodón, especialmente en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en forma de variedades autóctonas de algodón. Las intervenciones realizadas en el marco del proyecto han contribuido a reducir la brecha de género en el acceso a la tecnología mediante el desarrollo de un prototipo de tecnología para el cardado, hilado y procesamiento de la fibra de algodón destinado a las artesanas de Aguachica (Colombia). La experiencia se repitió en el Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de artesanas indígenas de Charagua y Pailón, y permitió mejorar la producción de hilos y artesanías y reducir el tiempo de hilado, al tiempo que contribuyó a la preservación de variedades autóctonas de algodón que también tienen un importante valor cultural. Durante el año 2020, el proyecto ayudó a establecer una red regional de mujeres que trabajan con el algodón, que incluye a productoras, artesanas, técnicas, diseñadoras y responsables de la toma de decisiones, y que tiene por objeto destacar y promover la importancia de las funciones de las mujeres en el sector y promover iniciativas para el empoderamiento económico de las mujeres. En julio de 2021 estaba previsto que se impartiera un curso regional para artesanas del algodón con el fin de apoyar la reactivación económica tras la COVID-19.

26. Con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca proteger la biodiversidad y reforzar la gestión de los parques nacionales de Greater Kafue y West Lunga en Zambia, con la integración de la perspectiva de género como un elemento clave. Se exige la paridad de género en la composición de los comités de gobernanza local que gestionan los bosques, y las mujeres representan la mitad de los miembros de los grupos de acción de las aldeas, incluidos puestos ejecutivos con capacidad de decisión sobre las actividades dirigidas por la comunidad para la ordenación sostenible de las tierras.

C. El fomento de la resiliencia, en particular de las pequeñas agricultoras, ante el cambio climático y la degradación ambiental

27. Los Estados Miembros están apoyando la resiliencia y la capacidad de adaptación de las mujeres y las niñas de las zonas rurales para responder a la degradación ambiental y a los efectos adversos del cambio climático¹⁶. Garantizar el ejercicio de la expresión, la capacidad de obrar y la participación de las mujeres y las niñas de las zonas rurales respecto a la toma de decisiones sobre cuestiones climáticas y ambientales es esencial para potenciar sus medios de vida, su bienestar y su resiliencia, así como la de sus comunidades. Se espera que la resiliencia que estas iniciativas pretenden fomentar —a menudo a través de soluciones innovadoras que implican energía sostenible y tecnología digital— tenga algunos efectos duraderos que preparen mejor a las mujeres y las niñas de las zonas rurales para hacer frente a las crisis y a los choques que se multiplican, ahora y en el futuro.

28. En Francia, la Agencia Francesa de Desarrollo lanzará una convocatoria de proyectos de “género y clima” en 2021, por un total de 5 millones de euros, para apoyar a organizaciones de mujeres de la sociedad civil de los países socios de la cooperación internacional francesa en la promoción de la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. El mecanismo Adapt’Action de la Agencia moviliza a las mujeres rurales para que detecten sus vulnerabilidades y las correspondientes soluciones, promueve medidas de adaptación específicas e inclusivas y ayuda a las mujeres a ser agentes de su propia resiliencia en la República Dominicana, Madagascar, Côte d’Ivoire, el Senegal, Guinea y la zona del océano Índico.

29. Qatar trabaja a nivel internacional para reforzar los derechos y el empoderamiento de las mujeres rurales. En diciembre de 2020, el Fondo de Qatar para el Desarrollo firmó un acuerdo de contribución con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para apoyar el Programa de Adaptación para las Pequeñas Explotaciones Agrícolas, con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 y las repercusiones del cambio climático en los pequeños agricultores, especialmente las mujeres que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo.

30. El Programa Conjunto para Acelerar el Progreso del Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales, ejecutado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ONU-Mujeres y el PMA en Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal, el Níger y Rwanda, ha reforzado la resiliencia de unas 65.000 mujeres y 15.000 hombres de las zonas rurales, ha ayudado a aumentar y diversificar la producción de alimentos, ha mejorado los resultados de la nutrición de sus familias y comunidades y ha incrementado los ingresos y los ahorros. El programa ha facilitado el acceso a activos para grupos de apoyo y cooperativas de agricultoras en las zonas rurales, así como el establecimiento de infraestructuras y tecnologías adaptadas al medio ambiente y al clima. Mediante el programa se pudo responder a las repercusiones de la COVID-19 gracias a la adopción de metodologías de ejecución a distancia, incluida la formación en línea de los interesados. Los participantes pudieron resistir en gran medida el impacto socioeconómico de la pandemia mediante la adaptación de sus microempresas, por ejemplo, diversificando el modo de venta o los productos, y gracias al acceso al ahorro y al crédito y a los vínculos establecidos con el gobierno local.

¹⁶ Véase el documento [A/74/224](#) para conocer otros ejemplos de apoyo de los Estados Miembros al fomento de la resiliencia de las mujeres y las niñas de las zonas rurales.

31. En 2020, como parte de un programa de resiliencia rural en el Yemen, el PNUD, junto con sus socios, prestó apoyo a 700 mujeres en la creación y gestión de microrredes, capacitándolas para conseguir empleo y participar en la toma de decisiones de la comunidad. La conectividad a las microrredes mejoró el acceso a la energía limpia de 10.000 personas. En Uzbekistán, el PNUD, con la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, puso a prueba un plan de hipotecas verdes en cinco regiones del país en colaboración con un banco local. Entre 2019 y 2020, el plan concedió 1.329 hipotecas para viviendas rurales asequibles con bajas emisiones de carbono, cuyos tejados se equiparon con paneles fotovoltaicos para generar electricidad. Las mujeres representaron la mayoría de los receptores de hipotecas, ya que obtuvieron el 67 % de todos los préstamos. Con el apoyo del PNUD y la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se logró incorporar a más mujeres de zonas rurales del Perú al sector energético gracias a eMujer, una nueva escuela de energía para mujeres que capacita a las residentes de zonas rurales en la instalación, el uso y el mantenimiento de dispositivos tecnológicos de energía limpia y la creación de pequeñas empresas que ofrecen productos y servicios de energía sostenible.

32. El programa conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ONU-Mujeres en Asia y el Pacífico, titulado “EmPower: Women for Climate-Resilient Societies” (2018-2022), tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las mujeres en una de las regiones más vulnerables al cambio climático, con especial atención a Bangladesh, Camboya y Viet Nam. En colaboración con el Gobierno y la sociedad civil, el programa ha apoyado la creación y aplicación de políticas sobre el cambio climático, ha realizado pruebas de recopilación de datos sobre los hogares, desglosados por sexo y género, relativos a los impactos del cambio climático, y ha fomentado la capacidad y el acceso a la financiación de las empresas de energía renovable de mujeres como parte de la recuperación verde. Además del trabajo sobre el terreno con las mujeres en sus comunidades y con los encargados de formular políticas de los tres países, el programa ha elaborado una serie de productos del conocimiento innovadores y documentos de orientación política, entre los que se incluyen “Cambio climático, igualdad de género y derechos humanos en Asia” (2020), “Género y cambio climático en el contexto de la COVID-19” (2020) e “Integración de la perspectiva de género en la política de energías renovables – Guía para los encargados de formular y adoptar políticas en materia de energías renovables” (2020).

33. La iniciativa programática insignia de ONU-Mujeres sobre la agricultura resistente al clima se ha desarrollado sobre todo en más de 15 países del África Subsahariana y se ejecuta a través de una asociación de múltiples interesados que incluye organismos de las Naciones Unidas, Gobiernos, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de mujeres productoras y cooperativas de agricultoras. La iniciativa ha reforzado la resiliencia climática de 50.000 mujeres agricultoras y sus comunidades a través de la acción programática y la promoción y reforma de políticas para reducir la huella de carbono del sector agrícola. Asimismo, ha mejorado la capacidad de las agricultoras para adaptarse al cambio climático mediante la transición a técnicas agroecológicas y la incorporación de tecnologías renovables y energéticamente eficientes, y está aumentando el acceso de las mujeres a la tierra, la financiación y los mercados. Para apoyar estos y otros esfuerzos, ONU-Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicaron la segunda edición del informe titulado “Realizing women’s rights to land and other productive resources” (2020).

34. La Iniciativa para la Resiliencia Rural R4 del PMA, centrada en la gestión integrada del riesgo climático, tiene como objetivo mejorar la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales mediante su capacidad para reforzar los ingresos

familiares y la seguridad alimentaria a través del acceso a medidas de reducción del riesgo de desastres, al ahorro financiero y a servicios de seguros climáticos, y promueve su igualdad de acceso a los recursos y la igualdad de expresión en la toma de decisiones. Durante 2020 y 2021, el programa R4 propició que casi 180.000 agricultores, de los cuales el 55 % eran mujeres, accedieran a productos de seguros parametrizados y a servicios complementarios de gestión del riesgo en diez países. Tras más de diez años de aplicación, el programa ha demostrado tener un impacto positivo en la toma de decisiones y la autonomía financiera de las mujeres, que desempeñan un papel integral en la determinación del modo de asignar los pagos del seguro recibidos. En 2020, el programa R4 apoyó a 85.000 agricultores, de los cuales el 70 % eran mujeres, reunidos en grupos de ahorro y préstamo en las aldeas, a fin de que acumularan ahorros modestos y pudieran acceder a pequeños préstamos para salvaguardar y diversificar los medios de vida, participar en actividades generadoras de ingresos y absorber mejor las crisis.

D. La mejora de la protección social en vista de su mayor necesidad durante la pandemia

35. Aunque la respuesta de la protección social a la pandemia quizá no tenga precedentes¹⁷, muchos países aún no se han recuperado de la crisis financiera de 2008 y de las medidas de austeridad que limitaron la inversión en protección social y servicios públicos. Casi el 70 % de la población mundial no estaba protegida por sistemas integrales de protección social al inicio de la crisis de la COVID-19, y las mujeres iban a la zaga de los hombres¹⁸. El Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 del PNUD y ONU-Mujeres analizó 3.112 medidas adoptadas en 219 países y territorios y determinó que, en marzo de 2021, 187 países habían adoptado unas 1.300 medidas que podía considerarse que tenían en cuenta el género. La protección social constituía más de la mitad de las medidas centradas en la seguridad económica de las mujeres (153 de 287); de ellas, las transferencias monetarias (68 medidas en 55 países) —la mayoría con una duración media de 3,3 meses— y la ayuda alimentaria (39 medidas en 32 países) fueron las más comunes. Sin embargo, la respuesta global se quedó muy corta respecto a lo que habría sido necesario para evitar el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Aunque todavía no se puede discernir la cobertura específica de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, las lagunas apuntan a la necesidad de contar con niveles mínimos de protección social universales que protejan mejor a todos antes de la próxima emergencia.

36. Los Estados Miembros informaron de las medidas adoptadas para aumentar la protección social y la cobertura sanitaria de las mujeres y las niñas de las zonas rurales en respuesta a las repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19.

37. En El Salvador, el proyecto de apoyo al empleo para 2017-2021 ha proporcionado a las mujeres rurales pequeños préstamos a un interés mínimo y asistencia no financiera y formación. El proyecto también respalda las iniciativas locales para apoyar el empleo sostenible de las madres solteras y proporcionó asistencia a 77.932 mujeres autónomas que cumplían los criterios pertinentes,

¹⁷ Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, *Global Food Policy Report 2021* (Washington D.C., 2021). *Transforming Food Systems After COVID-19* (Washington, D.C., 2021).

¹⁸ ONU-Mujeres, “The social protection response to COVID-19 has failed women. Towards universal gender-responsive social protection systems”, documento de reflexión, mayo de 2021.

incluidos los pagos de seis meses de cotización a la seguridad social, de abril a septiembre de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

38. Francia presentó una iniciativa de 1.200 millones de euros en 2020, titulada “COVID-19: La salud en común”, como parte de su respuesta global a la COVID-19. La iniciativa abarcaba medidas de protección social y reforzaba el acceso de las mujeres a los servicios sociales básicos, con especial atención a África. Francia también ha puesto en marcha una convocatoria de 15 millones de euros para proyectos de promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia.

39. En la República Islámica del Irán, el proyecto de Respuesta de Emergencia a la COVID-19 ha tenido como objetivo aumentar la resiliencia socioeconómica de las mujeres rurales y nómadas, especialmente de los hogares encabezados por mujeres, proporcionando kits sanitarios, formación por parte de facilitadoras rurales locales y ayuda financiera para apoyar a los negocios afectados por los confinamientos.

40. Como parte de la respuesta a la COVID-19 de Mongolia, el Programa de Dinero para los Niños se amplió durante nueve meses en 2020, de modo que las prestaciones aumentaron del nivel anterior a la COVID-19, que era de 20.000 togrogs (7 dólares) a 100.000 togrogs (35 dólares) al mes, y se llegó a 1,2 millones de niños, lo que ha sido de vital importancia para las familias rurales. En el presupuesto nacional aprobado para 2021 se propuso mantener este complemento hasta julio de 2021 para ayudar a las familias a superar las dificultades económicas causadas por la pandemia. El plan de acción del Gobierno para el período 2020-2024 pretende hacer más accesibles, transparentes y rápidos los servicios públicos mediante la prestación de servicios laborales y de bienestar social, incluidas las pensiones, las prestaciones para el cuidado de los hijos y las ayudas a las personas mayores y a los progenitores únicos, de forma digital y totalmente en línea.

41. El Perú proporciona 200 soles (50 dólares) mensuales a los niños y adolescentes que han perdido a uno o ambos progenitores a causa de la COVID-19, cantidad que se pone a su disposición de forma digital o, en las zonas rurales y remotas sin acceso a Internet, a través de agencias locales.

42. Eslovaquia, en su estrategia de servicios sociales y prioridades nacionales para 2021-2030, señala que la protección social es esencial para la inclusión social de las mujeres y los grupos desfavorecidos de las zonas rurales, y en particular los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y la población rural desempleada.

43. En Eslovenia, en respuesta a la COVID-19 en 2020 y 2021, se decidió que las agricultoras mayores de las zonas rurales que cumplieran los requisitos establecidos podrían recibir un pago solidario único.

44. La República Árabe Siria ha recurrido a los centros de desarrollo rural para proporcionar servicios integrados con miras al empoderamiento social de las mujeres rurales (salud reproductiva, atención primaria de salud, apoyo psicosocial, coordinación asistencial, guarderías, servicios educativos, información y consultas jurídicas, formación en el uso de ordenadores y otros programas de capacitación), que continuaron parcialmente durante la pandemia haciendo hincapié en la concienciación sobre la propagación y la prevención de la COVID-19. Los programas de asistencia en efectivo se centraron en las zonas rurales y dieron prioridad a las mujeres que mantenían a sus familias.

45. Tailandia proporciona refugio, alimentos y atención médica en todo el país a los grupos vulnerables afectados por la COVID-19, como las personas sin hogar y las personas desempleadas, incluidas las mujeres y las niñas de las zonas rurales. Los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo de las Mujeres y la Familia de ocho

provincias apoyan a las mujeres, incluidas las madres solas, para que desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan construir una vida estable después de la COVID-19, entre otros mediante cursos de formación profesional y fondos ocupacionales. También se puso en marcha un plan de suspensión de la deuda para ayudar a las mujeres afiliadas al Fondo Nacional de Desarrollo de la Mujer, que es un fondo rotatorio para apoyar las oportunidades económicas y el desarrollo de las mujeres.

46. En Turkmenistán, el proyecto de mejora del sistema de protección social mediante la introducción de servicios sociales inclusivos de calidad basados en la comunidad, financiado por el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretende diseñar un nuevo modelo de servicios comunitarios inclusivos para los niños en riesgo de separación de sus padres, los niños sin atención parental, los niños con discapacidad, los jóvenes en riesgo, las mujeres que sufren violencia de género, las personas con discapacidad y las personas mayores que necesitan apoyo con los cuidados básicos de la vida diaria.

47. Zimbabwe creó el Banco de Microfinanciación de la Mujer con el objetivo de mejorar el acceso de las mujeres a un capital asequible y a la financiación operativa y facilitar la inclusión financiera descentralizando el sistema bancario para hacerlo accesible a la mayoría de las mujeres que residen en zonas rurales o remotas y trabajan en la economía informal. Entre agosto de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, se abrieron un total de 75.451 cuentas bancarias de mujeres, la mayoría en zonas rurales, y se desembolsaron un total de 46.979 préstamos a mujeres.

48. El conjunto de herramientas de la FAO para programas de protección social sensibles al género orientados a luchar contra la pobreza y el hambre en el medio rural ayuda a los profesionales a aplicar una perspectiva de género en los programas de protección social de poblaciones rurales, que incluyen medidas como las transferencias de efectivo y las obras públicas, y abarca el diseño, la ejecución y el seguimiento y la evaluación de los programas. El conjunto de herramientas está disponible en inglés, francés y español para facilitar su aplicación en diversos contextos y su adaptación local.

49. El proyecto Smart Villages de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se está aplicando de manera experimental en el Níger y tiene como objetivo conectar comunidades rurales remotas y establecer una plataforma digital multifuncional y sostenible que pueda apoyar simultáneamente la provisión de múltiples instrumentos y servicios específicos de género con el potencial de transformar digitalmente la vida de las niñas y mujeres rurales. En el Níger, donde dos tercios de las mujeres no reciben suficiente supervisión médica durante el embarazo, el proyecto está desplegando un servicio de mensajería móvil para ofrecer atención sanitaria preventiva y consejos de nutrición a las madres jóvenes y a las mujeres embarazadas en forma de mensajes gratuitos, de texto o de voz, así como una solución de telemedicina en los centros de salud comunitarios rurales que permitiría a los médicos de cabecera consultar a especialistas de los hospitales y ofrecer un diagnóstico más cualificado y preciso a las pacientes.

E. La eliminación de todas las formas de violencia, especialmente teniendo en cuenta la pandemia en la sombra de violencia, y el suministro de servicios esenciales

50. Según el Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 del PNUD y ONU-Mujeres, la mayoría de las medidas con perspectiva de género adoptadas por los Gobiernos abordan la pandemia en la sombra de violencia contra las mujeres y las niñas (832, en 149 países). Sin embargo, las restricciones de movilidad ligadas a la

COVID-19 y la falta de transporte público, junto con la reorientación de los servicios sanitarios a la contención del virus, han dificultado especialmente el acceso de las mujeres y las niñas de las zonas rurales aisladas a los servicios esenciales. Los Estados Miembros han realizado importantes esfuerzos para llegar a las mujeres y niñas de las zonas rurales.

51. Bosnia y Herzegovina ratificó en 2013 el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, y ha puesto en marcha estrategias y políticas para prevenir y eliminar la violencia doméstica contra las mujeres. Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, el Organismo para la Igualdad entre los Géneros del país ha hecho recomendaciones a todas las instituciones pertinentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, los ministerios competentes y los equipos de crisis, para que incorporen una perspectiva de género en todas las medidas, incluida la prevención y la eliminación de la violencia doméstica contra las mujeres, y ha tomado medidas para reforzar su capacidad de responder a un aumento de la violencia y mantener los servicios necesarios durante la pandemia.

52. Bulgaria ha aumentado el número de centros de crisis que ofrecen alojamiento y servicios a las víctimas y supervivientes de violencia —de 13 en marzo de 2020 a 27 en marzo de 2021— y de unidades especializadas que ofrecen alojamiento temporal a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos que se enfrentan a la violencia doméstica o de otro tipo.

53. En El Salvador, con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2021, y como parte de la respuesta a la COVID-19, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer puso en marcha una plataforma de servicios virtuales para mujeres en situación de violencia que ofrece orientación y asesoramiento psicosocial y legal. Las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+) pueden utilizar cualquier dispositivo móvil para hablar de forma confidencial y gratuita con un especialista; todas las conversaciones se borran automáticamente y no dejan ningún rastro digital en el dispositivo.

54. La República Islámica del Irán puso varios sitios web y líneas de atención telefónica a disposición de las mujeres y niñas rurales y no rurales que hubieran sido víctimas o supervivientes de violencia durante la pandemia o que corrieran el riesgo de serlo. Miles de facilitadores expertos, entre ellos médicos, enfermeros, psicólogos y asesores jurídicos, ofrecen servicios sociales y psicológicos, consultas jurídicas e intervenciones.

55. Kirguistán distribuyó más de 50.000 folletos y carteles informativos para mujeres sobre servicios de apoyo y precauciones de seguridad; también organizó consultas en línea y en persona en centros de crisis de todo el país para víctimas y supervivientes de la violencia doméstica y puso en marcha una línea telefónica de protección social en enero de 2021 para dar una respuesta rápida y capaz a la violencia doméstica, incluido apoyo social, legal y psicológico, y recoger información y comentarios de los usuarios que sirvieran de base para políticas y programas.

56. En diciembre de 2020, el Parlamento del Líbano aprobó enmiendas a la Ley de Protección de la Mujer y de Todos los Miembros de la Familia contra la Violencia Familiar (Ley núm. 293/2014), orientadas a lograr una protección más eficaz de las víctimas y supervivientes de violencia, y aprobó una ley para tipificar el acoso sexual, rehabilitar a las víctimas y garantizar su reinserción en la comunidad.

57. En enero de 2021, Mongolia presentó un sistema de servicios de asesoramiento jurídico y psicológico y de protección social para víctimas y supervivientes de violencia doméstica.

58. En mayo de 2020, Rumania puso en marcha la aplicación Bright Sky, una herramienta digital gratuita para las víctimas y supervivientes de violencia doméstica disponible en rumano, inglés y húngaro, que proporciona asistencia e información, incluida una base de datos de servicios de apoyo, asesoramiento relacionado con el consentimiento en las relaciones sexuales y el acoso, estudios de casos de los diferentes comportamientos abusivos más frecuentes en las relaciones íntimas, y una función para registrar incidentes de violencia en un diario digital confidencial con contenido de texto, audio, vídeo y fotos que puede servir como prueba en los tribunales.

59. En 2019 y 2020, el PNUD prestó apoyo a más de 80 países en sus esfuerzos por abordar la violencia de género, entre otros mediante la integración de una perspectiva sobre la violencia de género en las intervenciones relativas a la COVID-19. Por ejemplo, el PNUD utilizó las tecnologías digitales para llegar a las víctimas y a los supervivientes durante los confinamientos, incluso en entornos rurales, y puso en marcha aplicaciones móviles en Mauricio, Montenegro y Uzbekistán que proporcionan un acceso seguro a los servicios y a la asistencia jurídica, psicológica y médica. En Indonesia, el PNUD trabajó con socios gubernamentales a nivel local y nacional para reforzar los mecanismos de remisión y ayudar a garantizar que las mujeres y las niñas de las aldeas remotas de la provincia de Papúa tuvieran acceso a los servicios.

60. La Iniciativa Spotlight es una alianza mundial entre la Unión Europea y las Naciones Unidas cuyo cometido es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en África, Asia, el Caribe, América Latina y el Pacífico. En 2020, más de 650.000 mujeres y niñas recibieron servicios esenciales relacionados con la violencia de género a pesar de las limitaciones relacionadas con la COVID-19 y los confinamientos. A fin de ayudar a superar las dificultades que encuentran las mujeres y niñas de las zonas rurales para acceder a los servicios esenciales, la Iniciativa Spotlight ha prestado apoyo, por ejemplo, a seis centros móviles para mujeres en Belice, que se desplazan a comunidades remotas para ofrecer servicios gratuitos de salud sexual y reproductiva, asesoramiento jurídico, apoyo psicosocial e información sobre la violencia de género en un solo lugar y que tramitan la remisión de las personas que necesitan una atención más prolongada.

F. El refuerzo de la reunión, el análisis y la difusión de datos desglosados por sexo y edad y estadísticas de género

61. Aunque existen importantes lagunas en los datos y las estadísticas disponibles sobre las mujeres y las niñas de las zonas rurales, los Estados Miembros han comunicado algunos progresos a pesar de las interrupciones de las operaciones estadísticas causadas por la COVID-19. Los datos desglosados por sexo y las estadísticas de género son fundamentales para elaborar políticas, programas y estrategias de desarrollo sostenible que tengan en cuenta las cuestiones de género y para comprender mejor las contribuciones sociales y económicas de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, incluidas las que realizan a la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia ambiental y climática, así como sus necesidades y prioridades relacionadas con la protección social, los servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la violencia de género. Algunos países siguen reuniendo datos sobre el empleo del tiempo que ayudarán a evaluar la parte desproporcionada de cuidados y trabajo doméstico no remunerados que asumen las mujeres y las niñas de las zonas rurales, entre otras cuestiones.

62. Colombia convocó a las organizaciones de mujeres rurales para evaluar el impacto de la COVID-19 en el empoderamiento económico de las mujeres rurales, la

salud, el conocimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a ellas y a los programas y la asistencia financiera gubernamentales. Entre las necesidades de datos e información prioritarias se encuentran la detección de las zonas rurales sin acceso a Internet y agua potable y la verificación de las listas de mujeres rurales que no se han beneficiado de los programas sociales nacionales.

63. En El Salvador, el Observatorio de Estadísticas de Género publica, entre otros informes, boletines periódicos sobre estadísticas de género que abarcan a las mujeres de zonas rurales y urbanas (el más reciente es de 2019) y sobre violencia contra las mujeres en todo el país (el más reciente es de enero a junio de 2020).

64. En 2021, Francia, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, prestó apoyo a un proyecto sobre estadísticas de género en Senegal como parte de la iniciativa de ONU-Mujeres “Hacer que cada mujer y cada niña cuenten”, en el marco del cual se preveía realizar estudios sectoriales y temáticos para medir el progreso respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 5.

65. En el Líbano, el Ministerio de Desplazados envió un cuestionario electrónico sobre desarrollo rural y local a todos los municipios del país, de los cuales el 87,9 % había respondido a fecha de 11 de mayo de 2021. Esos datos constituirán la base de un análisis de la situación de las mujeres en las zonas rurales.

66. Mongolia ha integrado preguntas relacionadas con el género en su censo ganadero a fin de recoger datos y evaluar la situación y las necesidades de las mujeres pastoras. Además, se llevó a cabo una encuesta piloto en la provincia de Bulgan para catalogar las actividades de las mujeres y los hombres pastores, incluido el tiempo dedicado a las tareas domésticas, y para evaluar su papel en la toma de decisiones, lo que debería servir de base para futuros estudios.

67. El portal web del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Perú pone periódicamente a disposición de los usuarios recopilaciones y boletines actualizados que proporcionan datos desglosados por sexo y estadísticas de género sobre la violencia económica, psicológica, física y sexual contra las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, inclusive en las zonas rurales, a fin de responder a la creciente demanda de información sobre estos temas.

68. España está actualizando el estudio de 2011 sobre la igualdad de género en el medio rural, que contiene información sobre la situación sociodemográfica y las desigualdades de género en las zonas rurales, entre otros en el ámbito laboral y respecto al uso del tiempo. También se están llevando a cabo estudios para obtener y generar información estadística adecuada y desglosada por sexo sobre las mujeres en el medio rural y el sector agrario que sirva para la toma de decisiones.

69. Turkmenistán llevó a cabo una encuesta sobre la salud y la situación de la mujer en la familia en 2020, cuyos resultados se han consolidado y se están analizando en la actualidad, y deberían servir para ayudar a revisar los indicadores del Objetivo 5.

70. En marzo de 2020, la FAO comunicó por primera vez datos sobre dos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 5.a.1 y el 5.a.2, que tienen en cuenta el género y respecto de los cuales dicha organización es custodia. Esos indicadores recogen información sobre los derechos de las mujeres a la tierra y sobre su tenencia. Desde entonces, la FAO ha acelerado los esfuerzos de fomento de la capacidad respecto a ambos indicadores y ha podido comunicar los datos de 10 países sobre el indicador 5.a.1 y de 16 países sobre el 5.a.2 con respecto al ciclo anual de informes de 2020. La FAO también presentó por primera vez todo el conjunto de datos nacionales, regionales y mundiales, desglosados por sexo, sobre el indicador 2.1.2

relativo a la inseguridad alimentaria, lo que permitió señalar las diferencias entre hombres y mujeres en la capacidad de acceso a los alimentos.

71. La herramienta Health Equity Monitor de la OMS permite desglosar múltiples indicadores de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente para detectar las desigualdades que afectan a las mujeres y las adolescentes de las zonas rurales. Esto proporciona datos sobre quiénes se están quedando atrás y sirve de base a las políticas, programas y prácticas sanitarias que buscan cerrar las brechas de género y de otro tipo existentes y lograr la equidad sanitaria. La OMS está utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional y el marco de seguimiento de la atención primaria de salud para analizar las desigualdades sanitarias en las zonas rurales y los aspectos clave del rendimiento de los sistemas de salud, a fin de que las reformas tendientes a la cobertura sanitaria universal logren satisfacer mejor las necesidades de los pobres de las zonas rurales. Durante el año 2021, la OMS ha avanzado en la elaboración de una base normativa para el análisis de equidad respecto al medio rural previo a la aprobación de políticas, estrategias, planes y programas nacionales de salud.

III. Conclusiones y recomendaciones

72. Los Estados Miembros se han comprometido a mejorar la situación de las mujeres y las niñas de las zonas rurales en un contexto mundial en el que las repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19 han agravado la crisis ambiental y climática, han empeorado la pobreza y la inseguridad alimentaria y han profundizado las desigualdades de género. La magnitud del actual conjunto de crisis, junto con las arraigadas desigualdades de género, significa que los enfoques de desarrollo rural integrados y con perspectiva de género que entrelazan los medios de vida, el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas de las zonas rurales pueden tener más posibilidades de lograr resultados duraderos si se apoyan en sistemas integrales de protección social y en el acceso a infraestructuras y servicios públicos sostenibles, asequibles y seguros, todo lo cual no existe en la mayoría de los países¹⁹.

73. Los Estados Miembros han apoyado proyectos que incorporan las consideraciones de igualdad de género y el empoderamiento, el ejercicio de la expresión, la capacidad de obrar y la participación de las mujeres del medio rural para mejorar los medios de vida, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales, así como la resiliencia climática y ambiental, integrando en muchos casos varios de estos aspectos o todos ellos. Varios países fueron capaces de superar las limitaciones ligadas a la COVID-19 para responder a la pandemia en la sombra de violencia contra las mujeres y las niñas, y en algunos casos pusieron en marcha opciones de transporte y soluciones digitales móviles para llegar a las mujeres y las niñas de lugares remotos y rurales. Sin embargo, la consolidación de los datos desglosados por sexo y edad y de las estadísticas de género sobre todos los temas tratados en el presente informe sigue siendo, en el mejor de los casos, poco sistemática. Aunque se ha informado de algunos avances, es necesario aumentar la atención de las políticas y la inversión financiera para alcanzar niveles adecuados de evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas de la situación de las mujeres y las niñas de las zonas rurales que sirvan de base a las políticas y a la acción para lograr mejoras tangibles.

¹⁹ Véase también [E/CN.6/2019/3](#).

74. Se alienta a los Estados Miembros a que apliquen las siguientes recomendaciones, presentadas a la consideración de la Asamblea General, para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales:

a) Adoptar medidas para cumplir los compromisos existentes en materia de desarrollo rural sostenible, igualdad entre los géneros y realización de los derechos humanos de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tomando nota de las recomendaciones generales núm. 34 (2016), sobre los derechos de las mujeres rurales, y núm. 37 (2018), sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un marco integrado y universal que no deja atrás a ninguna mujer ni niña de las zonas rurales;

b) Diseñar, desarrollar y poner en práctica políticas y programas de desarrollo agrícola y rural integrados, que tengan en cuenta las cuestiones de género y que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas de las zonas rurales;

c) Promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, incluidas las agricultoras, las pescadoras y las trabajadoras agrícolas, en las estrategias, las políticas y los programas de desarrollo agrícola y rural sostenible;

d) Garantizar la plena participación de las mujeres rurales, incluida en la toma de decisiones a todos los niveles, en materia de desarrollo agrícola y rural y de gobernanza del medio ambiente, el clima y los recursos naturales;

e) Tomar medidas decisivas para eliminar las formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia a las que se enfrentan las mujeres y las niñas de las zonas rurales;

f) Adoptar las medidas necesarias para frenar la pandemia en la sombra de violencia contra las mujeres y las niñas, garantizando el acceso a los servicios esenciales, los recursos legales y la justicia en las zonas rurales;

g) Promulgar y poner en práctica políticas para erradicar la pobreza y contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de subsistencia sostenibles, el trabajo decente y la seguridad de los ingresos en las zonas rurales, a fin de mejorar el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas de las zonas rurales;

h) Reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación de todas las mujeres y las niñas de las zonas rurales para responder a las crisis y perturbaciones económicas, sociales, ambientales y sanitarias y recuperarse de ellas;

i) Desarrollar y adoptar estrategias con perspectiva de género para apoyar la resiliencia y la capacidad de las mujeres y niñas rurales de responder a los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental;

j) Aumentar la resiliencia de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, en particular las pequeñas agricultoras, ante el cambio climático y la degradación ambiental mediante la promoción de prácticas y conocimientos tecnológicos ancestrales, autóctonos y modernos, y mediante el fortalecimiento del acceso a los servicios de extensión, la información y la capacitación;

k) Promover el papel de las mujeres y niñas rurales e indígenas en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluida la agrobiodiversidad;

l) Promover las capacidades, habilidades y conocimientos de las mujeres rurales, así como su acceso a la tecnología, la información y los mercados, para que puedan implicarse en la producción agrícola resistente al clima, la agroecología y la gestión sostenible de los recursos naturales;

m) Garantizar los derechos de propiedad y explotación plenos e igualitarios de las mujeres rurales y su seguridad de la tenencia de la tierra, así como su derecho a explotar los recursos naturales y productivos, mediante la elaboración, reforma y aplicación de las leyes y políticas pertinentes;

n) Invertir en infraestructuras y tecnologías sostenibles, incluidas las relativas al agua, el saneamiento, la energía y el transporte de carácter seguro, limpio y asequible, para todas las mujeres y niñas rurales y sus comunidades, entre otros como medio para reducir su carga desproporcionada de cuidados y trabajo doméstico no remunerados;

o) Apoyar a las mujeres y niñas de las zonas rurales mediante el fomento del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para que puedan conseguir educación, formación, financiación, seguros e información sobre el clima y el mercado;

p) Trabajar con miras a lograr la aplicación de sistemas de protección social que sean universales, respondan a las cuestiones de género, prevean niveles mínimos de protección y garanticen la seguridad de los ingresos de las mujeres y las niñas a lo largo de su vida;

q) Velar por el suministro y la asequibilidad de los servicios de atención sanitaria de las mujeres y las niñas de las zonas rurales mediante una cobertura sanitaria universal que comprenda el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de la vida;

r) Ampliar los sistemas de protección social integral a todas las mujeres y niñas de las zonas rurales, especialmente a las mujeres con empleos informales;

s) Velar por que las mujeres y las niñas que sufren formas múltiples e interseccionales de discriminación gocen de igualdad de acceso a la protección social, los servicios públicos y la infraestructura sostenible para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades;

t) Reforzar de forma prioritaria las capacidades de las oficinas nacionales de estadística, los organismos de desarrollo rural, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas para evaluar los impactos de la pandemia de COVID-19 en las mujeres y las niñas de las zonas rurales y aprovechar esos datos y esa información para fundamentar las políticas y los programas destinados a abordar y aliviar esos impactos;

u) Prestar apoyo a las instituciones sociales, económicas, políticas y científicas a fin de que tomen en consideración las consecuencias diferenciadas en función del género de la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático y la degradación ambiental para las mujeres y las niñas de las zonas rurales, y para que elaboren pruebas y estudios, instrumentos, bases de datos, metodologías y análisis de políticas sólidos y que tengan en cuenta las cuestiones de género con el objeto de responder a esas consecuencias y mitigarlas;

v) Aumentar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística y otras instituciones pertinentes para reunir, analizar y difundir datos desglosados por

sexo, edad y otras características, y producir estadísticas de género, entre otras cosas a través de censos agrícolas, para apoyar las políticas y medidas encaminadas a mejorar la situación de las mujeres y las niñas rurales y supervisar y hacer un seguimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

75. Se alienta al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, al tiempo que apoyan el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales en sus programas y estrategias, a ayudar a los Estados Miembros en la aplicación, la medición y el seguimiento de las anteriores recomendaciones a todos los niveles.
